



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicado: 05001-31-05-022-2019-00241-01
Demandante: Edgar Darío Jaramillo Duque
Demandado: Colpensiones E.I.C.E
Asunto: Apelación de Auto
Procedencia: Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín
M. Ponente: Sandra María Rojas Manrique
Tema: Indebida acumulación de pretensiones.

Medellín, marzo veintinueve (29) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, con ausencia justificada y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, como magistrada ponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la litigiosa por pasiva, contra el auto proferido el 15 de febrero de 2023 por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por Edgar Darío Jaramillo Duque contra Colpensiones E.I.C.E., conocido con el Radicado Único Nacional 05001-21-05-022-2019-00241-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor Edgar Darío Jaramillo Duque convocó a juicio ordinario laboral a Colpensiones E.I.C.E., pretendiendo el pago de las mesadas pensionales que se hubieren causado desde el momento en que cumplió los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez, o en subsidio, desde la fecha en que efectuó la última cotización; el reconocimiento de los intereses causados por la mora en el pago de las mesadas reconocidas en la Resolución GNR 173337 del 12 de junio de 2015; la indexación de las condenas, y las costas del proceso (doc.02, carp.01)

1.2.- CONTESTACIÓN

La sociedad llamada a resistir las pretensiones dio respuesta al libelo demandatorio oponiéndose a las pretensiones incoadas, proponiendo como excepción previa, la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o indebida acumulación de pretensiones, indicando que las pretensiones numeradas en la demanda 3ª, 4ª y 5ª, referidas al reconocimiento y pago de intereses de mora e indexación, fueron propuestas de forma principal, conjunta e indivisible, contrariando el criterio de incompatibilidad sentado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual solicita se descarten ambas pretensiones por haber sido indebidamente acumuladas (doc.10, carp.01).

1.3.- DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En la audiencia celebrada el 15 de febrero de 2023, se declaró impróspera y dilatoria la excepción previa formulada, argumentando que las pretensiones declarativas y de condena fueron incoadas de forma independiente, y que los intereses fueron deprecados por el periodo comprendido entre el 28 de febrero de 2015 y 29 de julio de 2015, y mientras que la indexación fue solicitada de ahí en adelante (doc.31, carp.01).

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

La poderhabiente judicial de la parte actora impetró los recursos de reposición y en subsidio apelación, procurando se declare probada la excepción previa incoada, arguyendo que en las pretensiones 3ª y 4ª y se solicitó el reconocimiento de los intereses de mora con la respectiva indexación, lo que corresponde a una doble condena de actualización, y que en la pretensión 5ª se solicitó adicionalmente la indexación de las condenas, lo que conllevaría a una triple sanción por concepto de actualización monetaria; adicionalmente, relievó que las pretensiones deben entenderse tal cual fueron redactadas, esto es, sin presumir que unas fueron principales y otras subsidiarias, porque así no se establecieron (minuto 12:50, doc.30, carp.01).

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada de la parte actora explicó que el reconocimiento de los intereses moratorios deprecados causados desde el 19 de julio de 2015, esto es, desde el sexto mes y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago del retroactivo pensional reclamado, y de la indexación no representa una condena adicional, sino que permite el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones; consecuentemente solicitó se aclare la fecha desde la que procede el reconocimiento de intereses de mora, y el momento desde que procede la indexación de las condenas, en orden a evitar una confusión que vulnere los derechos del demandante (doc.03, carp.02).

2.- CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

La competencia de esta corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y lo previsto en los artículos 65 y 66 del Código de Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificados por los artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001.

2.1.- PROBLEMA JURÍDICO

¿Si las pretensiones referidas al reconocimiento de intereses de mora e indexación fueron incoadas de forma principal y/o subsidiaria, y si, en razón de su presunta incompatibilidad, fueron acumuladas de forma indebida?

2.3.- TESIS DE LA SALA

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual no se configura la excepción previa de inepta demanda por falta de requisitos formales o indebida acumulación de pretensiones, teniendo en cuenta que el libelo genitor, interpretado en los términos adocotrados por la jurisprudencia, satisface los requisitos contemplados en el artículo 25 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, por lo que se CONFIRMARÁ la decisión adoptada en la primera instancia

2.4.- PREMISAS NORMATIVAS

Las excepciones previas, también conocidas como dilatorias, son aquellas destinadas a sanear el proceso, y por ello, su cometido no es el de cuestionar el fondo del asunto, sino el de mejorar el trámite de la Litis, y así, evitar posibles nulidades, o terminar el proceso cuando no es posible sanearlo, de forma tal que, el legislador previó que debían ser resueltas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio (artículo 32 del CPTSS).

Adicionalmente, se advierte que de conformidad con lo previsto en el numeral 5° del artículo 100 del Código General del Proceso, dentro del término del traslado de la demanda, el demandado puede excepcionar como previa la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.

En sublite se discute la compatibilidad del reconocimiento de intereses de mora e indexación, punto sobre el cual la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL9316 de 2016, reiterada en las sentencias, SL3136 de 2018, SL1381 de 2019, SL2876 de 2022, entre otras, adoctrinó:

“Pues bien, la razón está de parte del Tribunal y no del recurrente en casación, como quiera que es criterio de la Sala, que la condena por indexación de las sumas adeudadas o dejadas de percibir y los intereses de mora son efectivamente incompatibles. Al respecto, basta con traer a colación lo sostenido en la sentencia de la CSJ SL, 6 sep. 2012, rad. 39140, en la que se dijo:

(...) que el criterio actualmente imperante en la Sala es el de la incompatibilidad de intereses moratorios con la indexación, ya que los primeros involucran, en su contenido, un ingrediente revaloratorio; tal como se dijo, al rectificar el antiguo criterio de compatibilidad de ambas figuras vertido en sentencia del 1º de diciembre de 2009, radicación 37279, en la sentencia del 6 de diciembre de 2011, radicación 41392, la que acogió, para ello, pronunciamiento de la Sala de Casación Civil de la esta misma Corporación datado el 19 de noviembre de 2001, expediente 6094.

En igual sentido, la sentencia CSJ SL, 28 ago. 2012. rad. 39130, sobre el particular precisó:

Habida consideración de que, a lo largo de la historia de la jurisprudencia, la Corte ha dejado claro que procede la indexación de los créditos laborales cuando quiera que respecto de los mismos no proceden los intereses moratorios, tal y como ocurre en este caso, en el cual, el juez de la alzada la impuso al no encontrar procedentes los primeros.

Y en sentencia más reciente CSJ SL 6114 - 2015, 18 mar. 2015, rad. 53406, se puntualizó:

En cuanto al fondo, ciertamente la jurisprudencia actual de la Sala, ha dicho que las condenas por intereses moratorios e indexación sobre mesadas pensionales insolutas resultan incompatibles, en tanto como atinadamente lo afirma la censura, comportan una doble sanción para el deudor

Al efecto, es conveniente recordar, que si bien es cierto se trata de dos conceptos diferentes, ya que los intereses moratorios previstos en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, corresponden a una sanción por mora, es decir, por el pago tardío de la prestación que se ha debido cancelar oportunamente en los términos legalmente dispuestos, en cambio la

indexación es la simple actualización de la moneda para contrarrestar la devaluación de la misma por el transcurso del tiempo, dada la generalizada condición inflacionaria de la economía nacional. Sin embargo, también lo es, que tales intereses moratorios se pagan a «la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago», lo que equivale a una suma considerablemente superior a la corrección monetaria o indexación, que alcanza para cubrir perfectamente la devaluación de la moneda, esto es, que el valor adeudado se «actualice» y mantenga el mismo poder adquisitivo al momento de su pago. De ahí que se entienda, en términos de justicia y equidad, que aplicado el interés moratorio este comprende el valor por indexación”.

Sin embargo, frente a la prosperidad de la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tiene por establecido, en una línea jurisprudencial uniforme, que su aplicación debe ser restrictiva de cara al deber del juez de interpretar la demanda:

“... cuando la demanda genitora del proceso sea oscura, imprecisa o vaga, gravita sobre el juzgador, no una mera potestad de interpretarla, sino el deber de hacerlo, por supuesto dentro de los límites establecidos en la ley con miras a precisar sus verdaderos alcances, labor a la que sólo pueda (sic) sustraerse cuando la confusión sea de tal magnitud que, pese a sus esfuerzos, no logre desentrañar sus alcances sin alterar el contenido objetivo, pues es obvio que en tal caso, en lugar de cumplir con su cometido, estaría sustituyendo la voluntad del demandante y trocando, a su antojo, el objeto de litigio”. (CSJ, Cas. Civil, sentencia abril 17 de 1998. Expediente. 4.680. M.P. Jorge Antonio Castillo Rúgeles).

Criterio que fue acogido y consolidado por la Sala de Casación Laboral de la misma corporación, en la Sentencia SL del 14 de febrero de 2005, radicado 22923, reiterada en las Sentencias SL del 22 de noviembre de 2011, radicado 33083, SL del 04 de julio de 2012 radicado 38051 y SL807 de 2013, entre otras:

“Desde antaño, es jurisprudencia adoctrinada que cuando el juez al momento de dictar sentencia se encuentra ante una demanda que no ofrezca la precisión y claridad debidas, bien por la forma como aparecen las súplicas, ora en la exposición de los hechos, también en los fundamentos de derecho, o en las unas y en los otros, está en la obligación de interpretarla para desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante, al formular sus súplicas, para lo cual debe tener muy presente todo el conjunto de ese libelo,

sin que pueda aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una afortunada integración, por cuanto los dos forman un todo jurídico; y además si es necesario para precisar su auténtico sentido y aspiración procesal, tener en cuenta las actuaciones que haya desarrollado el actor en el trámite del proceso, lo cual debe observar celosamente el instructor judicial a manera de saneamiento, a efecto de evitar una nulidad o una decisión inhibitoria con grave perjuicio para los litigantes y talanquera infranqueable para que se llegue a la norma individual constituida con la sentencia de fondo, lo que choca con el deber ser de la administración de justicia.

Pero la labor interpretativa no puede ser ni mecánica ni ilimitada, siempre deberá dirigirse a consolidar su naturaleza y los fines que se buscan con la demanda, sobre todo en casos donde se presenta de manera oscura e imprecisa, haciendo que surja lo racional y lógico de la pretensión querida por el demandante, sin ir a caer en exigencias extravagantes, bien de datos, factores o circunstancias que no son indispensables para determinar el alcance de la pretensión deseada con amparo en la Constitución y la ley.

Es que hoy más que nunca se debe ser objetivo en la contemplación de la demanda introductoria del proceso y es cuando la labor del juez dispensador del derecho debe estar siempre dirigida a desentrañar no sólo el sentido, alcance o el propósito del precepto jurídico portador del ritual y el derecho, sino también el entendimiento cabal de la conducta del sujeto de derechos que ha venido a la jurisdicción en procura de una tutela oportuna de los mismos, que en el desarrollo de la justicia social es de trascendental importancia.

Por ello al encargado de administrar justicia, se le atribuye como misión ineludible interpretar los actos procesales y extraprocesales que se relacionen en cada litigio que se le asigne por competencia, a efecto de aplicar con acierto las disposiciones legales y constitucionales que regulen la materia puesta a su disposición, para una solución adecuada y justa.”

Criterio que se ratificó en la Sentencia STC6507-2017, en la que se preceptuó:

“... el juez debe interpretar la demanda en su conjunto, con criterio jurídico, pero no mecánico, auscultando en la causa para pedir su verdadero sentido y alcance, sin limitarse a un entendimiento literal, porque debe trascenderse su misma redacción, para descubrir su naturaleza y esencia, y así por contera superar la indebida calificación jurídica que eventualmente le haya dado la propia parte demandante. Tales hechos, ha dicho la Corte, ‘son los que sirven de fundamento al derecho invocado y es sobre la comprobación de su existencia y de las circunstancias que los informan sobre que habrá de rodar la controversia’ (Sentencia de 2 de diciembre de 1941). Si están probados los hechos, anotó en otra ocasión, ‘incumbe al juez calificarlos en la sentencia y proveer de conformidad, no

obstante, los errores de las súplicas: da mihi factum, dabo tibi ius' (G.J. No. 2261 a 2264, pág. 137)”

2.5.- CASO CONCRETO

Ahora bien, consultado el líbelo genitor, se tiene que las pretensiones objeto de excepción fueron incoadas en de la siguiente manera:

“TERCERO: Que se declare que el señor EDGAR DARIO JARAMILLO DUQUE, tiene derecho a los intereses de mora consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, con su respectiva indexación, desde la fecha 28 de febrero de 2015 hasta el 29 de julio de 2015, fecha en la cual se hizo efectivo el pago de la primera mesada pensional de la prestación económica reconocida en la Resolución GNR 173337 del 12 de junio de 2015.

CUARTO: Que se condene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) al pago de los intereses de mora consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, con su respectiva indexación, desde la fecha 28 de febrero de 2015 hasta el 29 de julio de 2015, fecha en la cual se hizo efectivo el pago de la primera mesada pensional de la prestación económica reconocida en la Resolución GNR 173337 del 12 de junio de 2015.

QUINTO: Que se ordene a Colpensiones que todas las sumas que sean reconocidas en esta demanda sean debidamente indexadas”.

En atención a lo expuesto en el sustento fáctico de las pretensiones, se concluye que lo procurado por la parte actora en las pretensiones 3ª y 4ª, es el reconocimiento de los intereses de mora causados hasta el 29 de julio de 2015, y la indexación de los mismos (*intereses*) de ahí en adelante, pretensiones entre las que, a consideración de la sala, no se configura la incompatibilidad pregonada, teniendo en cuenta que, aunque ambos conceptos tienen la vocación de actualizar el valor de la obligación, bajo la hipótesis planteada por esta corporación, dicha actualización se está solicitando sobre dos capitales distintos, esto es, los intereses de mora solo se liquidarían hasta el 29 de julio de 2015 con la intención de actualizar el valor el retroactivo pensional presuntamente adecuado, y la

indexación se aplicaría desde el 30 de julio de 2015, con el fin de actualizar el valor de los intereses moratorios causados.

En lo que respecta a la pretensión 5ª, toda vez que se formula en forma general, se considera que es al juez de la causa al que le concierna, en la etapa procesal juzgamiento, determinar si las condenas reconocidas en la sentencia son susceptibles de ser indexadas, en la medida en la que resulta factible que la pretensión de intereses moratorios no alcance prosperidad, y como la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia recientemente adocrinó que la indexación no comporta una condena adicional a la solicitada, sino que materializa el constante poder adquisitivo de la moneda (SL359-2021), menos aún se configura una indebida acumulación.

En glosa de lo anterior, lo procedente será confirmar la decisión de primera instancia. Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones E.I.C.E. y en favor de Edgar Darío Jaramillo Duque; se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000 que corresponde un (1) SMLMV.

3.- DECISION

De conformidad con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

RESUELVE


1.- Se CONFIRMA el auto proferido el 15 de febrero de 2023 por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, y mediante cual se declaró no probada la excepción previa de inepta demanda, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor Edgar Darío Jaramillo Duque contra Colpensiones E.I.C.E.

2.- Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones E.I.C.E. y en favor de Edgar Darío Jaramillo Duque; se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000

Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**, de conformidad con el numeral segundo del literal c) artículo 41 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

(Sin firma por ausencia justificada)

El presente auto fue notificado en los Estado N° 55 fijados en la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 30 de marzo de 2023

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario